



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA CIVIL

Medellín, ocho (8) de marzo de dos mil veinticuatro (2.024)

Magistrado: JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
APELACIÓN DE AUTO: 05001 31 03 018 2021 00432 01

Proceso:	Pertenencia.
Demandantes:	YADIRA ARIAS MAZO.
Demandados:	MARÍA GRACIELA CANO DE ESPINAL y otros.
Extracto:	Revoca decisión que rechazó contestación a la demanda.

ASUNTO A TRATAR

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por la codemandada MARÍA GRACIELA CANO DE ESPINAL, contra el auto calendado el veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023), proferido por el JUZGADO DIECIOCHO CIVIL DEL CIRCUITO de Medellín.

ANTECEDENTES

En auto del 1° de diciembre de 2.021, corregido el 12 de enero de 2.022, se admitió la demanda declarativa de pertenencia de la referencia, incoada contra, entre otros, doña MARÍA GRACIELA CANO DE ESPINAL e indeterminados, y en la que se pretende una fracción del bien inmueble identificado con Matrícula Inmobiliaria 01N-12638 (ver archivos 21 y 23 cuaderno primera instancia).

Ab initio la actora indicó bajo juramento que desconocía el sitio de ubicación física o electrónica de los codemandados NABOR ZENARIO ESPINAL PORRAS y la hoy recurrente, de los que afirmó que “se encuentran domiciliados en Estados Unidos de Norte

*América.*¹, por lo que en auto del 15 de junio de 2.022² se ordenó el emplazamiento, y surtido el mismo se les designó curador *ad litem*, quien el 3 de agosto de 2.023 y luego recibir el expediente digital, contestó a la demanda³. Para el día 22 siguiente, CANO DE ESPINAL se pronunció contestando la acción⁴, a lo que el *a quo* mediante la providencia hoy apelada, incorporó el correspondiente escrito, pero “*sin trámite por extemporáneo*”⁵.

Al respecto, tal codemandada presentó los recursos de reposición y en subsidio apelación⁶, aduciendo que la aceptación del cargo por el curador, no puede entenderse como notificación por conducta concluyente, pues está no satisface las exigencias de los artículos 91 y 301 del C. G. del P., por lo que su enteramiento no ocurrió con la notificación del auto del 18 de julio de 2.023 que la tuvo por enterada.

Agregó que su emplazamiento tuvo información contradictoria e insuficiente, por lo que la designación del curador fue “*ilegal*”, hecho este que podría configurar nulidad en los términos del artículo 133.8 procesal civil, debiéndose corregir lo actuado y considerarse su contestación como oportuna.

En traslado de lo anterior, hubo silencio.

El *a quo* mantuvo la decisión, indicando que el emplazamiento se surtió conforme los artículos 10 de la Ley 2213 de 2.022 y 108 del C. G. del P., donde cumplidas las exigencias se designó curador *ad litem*, quien el 14 de julio de 2.023 aceptó el encargo y se dio por notificado; de ahí que a la luz del artículo 301 ibídem, se le consideró enterado por conducta concluyente, sin que se puedan revivir términos procesales, sumado a que no se advierte ninguno de los supuestos del artículo 133 procesal civil.

¹ Ver folio 7 de la demanda, esto es, el archivo 04 ídem.

² Archivo 36 de igual cuaderno.

³ Archivo 62 ídem

⁴ Archivo 64 cuaderno principal.

⁵ Archivo 65 del mismo cuaderno.

⁶ Archivo 66 cuaderno principal.

Respecto al tiempo de traslado (veinte días), que el mismo comenzó a correr el 21 de julio de 2.023, o sea, una vez notificada la providencia del día 18 de ese mes y año, tal como lo señala el inciso 2º del artículo 118 ídem. Ese traslado venció el 18 de agosto de igual año (2.023), por lo que la contestación de la recurrente, enviada por correo electrónico del día 22 de ese mes y año, fue extemporánea.

Subsidiariamente concedió la alzada, por lo que atendiendo que la providencia censurada es apelable conforme al artículo 321.1 del C. G. del P., se resuelve de plano según el artículo 326 ibídem, previas:

CONSIDERACIONES

El recurso de apelación busca que el Superior funcional estudie el asunto decidido en primera instancia, con el fin de revocarlo o reformarlo, sentido en el cual se dirigirá el siguiente análisis, dentro del principio de la limitación que impone el artículo 328 procesal civil.

La notificación es un acto procesal necesario y elemental para proteger las garantías del debido proceso, garantizando el ejercicio del derecho de defensa. Sobre ello la Corte Constitucional ha referido:

“(...) la debida notificación es un ejercicio judicial que se deriva del respeto al principio de publicidad. Este principio, como lo definió la sentencia C-980 de 2010, tiene la finalidad de garantizar el conocimiento de la existencia de un proceso o actuación judicial, de tal manera que asegure a las partes el ejercicio pleno del derecho de defensa, contradicción e impugnación. Desde ese punto de vista, entonces, la notificación, más que pretender formalizar la comunicación del inicio y desarrollo de una determinada actuación, lo que busca es legitimar las decisiones de las autoridades jurisdiccionales y proteger las garantías procesales intrínsecamente relacionadas con el derecho a la defensa”. (Sentencia T 397 de 2.015).

Valga anotar que tal acto de comunicación está debidamente regulado, lo cual se sigue estudiando de cara a la alzada, para en últimas responder si la contestación de la recurrente fue o no extemporánea. Ese es el problema jurídico a resolver.

Ciertamente a la recurrente mediante el auto del 6 de julio de 2.023 (archivo 58), se le nombró curador *ad litem*, el que el día 14 de julio siguiente allegó escrito, en el que además de aceptar el encargo, deprecó se le suministrara “*el LINK correspondiente y obtener así la revisión del expediente electrónico*” (sic).

Tal conducta concluyente se consideró en el auto del 18 de julio de tal año (archivo 60), precisándose en él que el enteramiento se entendía surtido desde la fecha de notificación de ese auto, disponiendo por Secretaría enviar vía correo electrónico al curador, “*el escrito de demanda y sus anexos, el auto admisorio y el link de acceso al expediente digital.*”, lo cual se cumplió el 25 de julio siguiente (archivo 61).

Entonces, ciertamente en cuanto a la notificación aplica el artículo 301 del C. G. del P., en la medida que el curador se notificó por conducta concluyente, tal como se consideró; sin embargo, otra cosa es el traslado de la demanda, entendido como el “*punto de partida del plazo que confiere la ley al demandado para ejercer su derecho de contradicción*”⁷.

Para lo último acudimos al artículo 91 del C. G. del P., del que se tiene “*El traslado se surtirá mediante la entrega, en medio físico o como mensaje de datos, de copia de la demanda y sus anexos...*”⁸, donde si ello ocurrió el 25 de julio de 2.023 (archivo 61), el término para contestar inició al día siguiente (26 de julio), período que finalizó el 25 de agosto de igual año.

Así las cosas, si la contestación de la hoy recurrente se presentó el 22 de agosto de 2.023 (archivo 64), la misma fue en tiempo,

⁷ Sobre el punto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia indicó: “*Como puede verse, en ambos casos la pauta legal diferencia dos fenómenos muy distintos: la notificación personal de una providencia que está sujeta a esa especial forma de enteramiento, y el hito inicial del término de traslado de la demanda, es decir, el punto de partida del plazo que confiere la ley al demandado para ejercer su derecho de contradicción.*”. (STC10689-2022)

⁸ El curador estaba facultado para solicitar dichas piezas procesales dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, lo cual hizo anticipadamente el 14 de julio de 2.023.

debiéndose considerar en lo que corresponda, ya que: una cosa es la notificación, la cual se ajustó a lo reglado para la conducta concluyente; y otra, el traslado de la demanda, para la cual era necesario considerar el citado artículo 91 procesal civil.

Bajo las anteriores consideraciones, ha de prevalecer el derecho de contradicción y defensa, pues los mismos hacen parte de la estructura del debido proceso, con lo que se ve relevado el Tribunal de pronunciarse sobre la configuración de nulidades procesales o el acto de emplazamiento.

En tales términos, se revocará el auto atacado. Sin costas en esta instancia ante la prosperidad de la alzada.

Por lo expuesto, el Tribunal:

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto del veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023), en lo que se refiere al rechazo por extemporánea de la contestación a la demanda presentada en nombre de la codemandada MARÍA GRACIELA CANO DE ESPINAL, según lo motivado.

SEGUNDO: Ejecutoriada la presente providencia, vuelva el expediente al Despacho de origen. Sin costas.

Notifíquese:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
MAGISTRADO